

La crisis invisible: la política cubana en la década de los noventa

LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN SEÑALÓ EL NACIMIENTO de un mundo nuevo: las sociedades que habían cifrado sus esperanzas en la construcción del socialismo como alternativa a la economía de mercado y a la democracia liberal estaban en ruinas. Pero el viejo orden no sólo fue arrasado en Europa del Este. Desde finales de los setenta los países latinoamericanos comenzaron, de manera gradual, a elegir sus presidentes, mientras que los generales mayormente regresaban a los cuarteles, y en el campo de la economía el estado le cedió mucho terreno al mercado. En los ochenta, los ciudadanos de los estados capitalistas de Asia disuadieron a sus gobiernos autoritarios de la idea de que el progreso económico y el orden social resultaban suficientes. Aun cuando no llegaron a conformar una economía capitalista, los partidos comunistas de China y Vietnam llevaron a cabo reformas de largo alcance que socavaron de manera decisiva la economía socialista. Cuba ha desafiado durante largo tiempo estos aires de cambio irresistibles para el resto del mundo, y contra todo pronóstico, el gobierno de Fidel Castro no ha caído.

Cuba, sin embargo, se encuentra inmersa en una crisis política que es invisible, latente, por cuanto el ciudadano medio aún no ha desafiado de forma amenazante al gobierno. Aunque resulta menos evidente, esta crisis política no es menos real que la económica. Desde 1959 los líderes cubanos se han apoyado en la figura de Fidel Castro, en la política unipartidista y en las movilizaciones de masas para dirigir el país. Tras el fin de la guerra fría han continuado comportándose casi de la misma manera que en el pasado, proclamándose como los únicos defensores de la soberanía nacional y la justicia social. Ya sea por convicción, miedo o impotencia, el pueblo cubano ha aceptado esta autorreafirmación de la dirigencia. El hecho de que, en

Marifeli Pérez - Stable

circunstancias notablemente desfavorables, el gobierno evitara correr la misma suerte de sus antiguos aliados en la Unión Soviética y Europa del Este a principios de los noventa, demostró una resistencia política impresionante. No obstante, el que esta resistencia dependa en tan gran medida de la presencia de Fidel Castro, del monopolio que ejerce el partido comunista, y de los rituales de las movilizaciones populares, es sintomático de la crisis política latente. A la larga, este modelo de gobierno simplemente no podrá aplicarse en Cuba; el fantasma de la mortalidad de Castro extiende su sombra sobre el gobierno cubano.

Aún así, los dirigentes cubanos se niegan a reconocer que la política sea la causa fundamental de la situación en que se encuentran, pues aceptar la naturaleza política de la crisis los encaminaría poco a poco hacia la democracia pluripartidista, y unas elecciones realmente libres supondrían la posibilidad de tener que ceder el poder a otras élites, opción ésta que Castro, en particular, no parece estar dispuesto a considerar. Por el contrario, el gobierno ha seguido su curso con un proceso que ha denominado *perfeccionamiento* del sistema político, rediseñar sus márgenes, establecidos mucho tiempo atrás. La dirigencia cubana ha intentado reconstituir su poder reforzando el control político y aplicando modestas reformas económicas. Ya a las puertas del fin de siglo, esta estrategia todavía funciona.

A diferencia de los regímenes no democráticos de América Latina y Europa del Este, Cuba aún deberá enfrentarse a las consecuencias que se deriven de una respuesta negativa a las siguientes cuestiones: ¿Pueden los actuales dirigentes continuar gobernando de la misma forma que lo han hecho hasta ahora? ¿Seguirán aceptando los gobernados ese modelo de gobierno? Durante la década de los noventa la dirigencia cubana, de hecho, se las arregló para obtener respuestas afirmativas, si bien no permanentes, a estas cruciales interrogantes. Este ensayo analiza algunos de los cambios sufridos por dos instituciones que han conformado el núcleo del proceso de *perfeccionamiento* político: el Partido Comunista de Cuba (PCC) y las asambleas del Poder Popular. A pesar de que estas organizaciones no se han destacado por impulsar el sistema político hacia un modelo de gobierno viable en una Cuba post-Castro, sí han demostrado la habilidad de la actual dirigencia para reforzar el paradigma de las políticas de movilización que fuera consolidado mucho tiempo atrás.

EL PCC DURANTE EL PERÍODO ESPECIAL

Durante la década de los noventa se reafirmó el modelo político establecido en Cuba, pero la política no pudo funcionar como lo había hecho hasta entonces. Incluso antes de que se produjera el descrédito final de los partidos comunistas y del marxismo-leninismo en la Unión Soviética y en la Europa del Este, ya Castro había apelado a los símbolos y la historia de *la patria* como fuente esencial para legitimar su ideología. Mientras los comunistas liberales, con Mijail Gorbachov al frente, trataban de renovar el socialismo aprobando la diversidad política y las reformas del mercado, el gobierno cubano se dedicaba a reafirmar los principios de unidad e igualdad. Durante esos años se

puso aún mayor énfasis en la firme determinación de los dirigentes cubanos de permanecer en el poder y renovar el sistema político exclusivamente dentro de los límites ya establecidos. Sólo el PCC como «*el partido único de la nación cubana*» y los dirigentes del momento como *mambises* contemporáneos poseían los medios para salvaguardar Cuba. Hasta el presente, la dirigencia cubana ha impedido que surja espacio alguno para llegar a un compromiso político aceptable para todos, por lo que se ha quedado en una situación muy vulnerable ante las consecuencias de lo inevitable: una Cuba sin Fidel Castro.

A mediados de la década de los noventa el gobierno cubano se sentía reforzado. Los dirigentes transmitían un mensaje claro a los miembros y cuadros del PCC: lo peor ya había pasado. Los tiempos exigían que se dispusieran a defender *la patria* y que profesaran la ideología revolucionaria. El PCC negó en repetidas ocasiones que el país estuviera atravesando una crisis política; las instituciones se encontraban «*en plena capacidad de autorreflexión y autorrenovación*». Se habían realizado algunos cambios y continuarían produciéndose otros, pero únicamente bajo el control del PCC, dentro de las características particulares de Cuba, y supervisados por Castro. Un documento publicado en agosto de 1996 afirmaba que el partido dependía más que nunca de las instituciones estatales, las organizaciones de masas y los militantes, y que ejercía mayor autoridad a nivel municipal y de empresa. En tanto que la experiencia de la Unión Soviética y de la Europa del Este había desacreditado el modelo de sistema dirigido por un partido comunista, la dirigencia cubana se empeñaba en reafirmar más que nunca los antiguos métodos ortodoxos. No obstante, la presencia de Castro impedía que el PCC funcionara a plenitud dentro de los parámetros de la política del partido de vanguardia, pues en última instancia, su voluntad tenía un peso determinante a la hora de definir las orientaciones políticas.

La resistencia a adoptar un amplio programa de reformas económicas se debía al énfasis tenaz con que el gobierno insistía en los métodos ortodoxos, únicos capaces de garantizarles el control político. Si el gobierno acometiera la empresa de una reestructuración económica como lo hicieron los partidos comunistas de China y Vietnam, los parámetros de la política cubana podrían cambiar, aunque no necesariamente a favor de una democracia. La puesta en práctica de un auténtico programa de reformas haría necesario un nuevo discurso político que atrajera a nuevos sectores de la ciudadanía y además lograra mantener a su antigua base y encauzarla en nuevas direcciones. Semejante discurso político no existía en Cuba. Por el contrario, en marzo de 1996, el vicepresidente Carlos Lage declaró, sin dejar lugar a dudas, que el proceso de reformas estaba determinado por «*criterios políticos*». Después de que la revolución de 1956 fuera aplastada, János Kádár convocó al pueblo húngaro a sellar un nuevo pacto social: echemos a un lado la política, seamos productivos, y «*comamos salchichas*.» Ya en los noventa, Deng Xiaoping hizo público un sencillo precepto: «*¡La gloria consiste en enriquecernos!*» En ambos casos, el llamado era de una trascendencia tanto política como económica. No es probable que Castro incluya en el repertorio de imágenes al que recurre para movilizar a las masas el «*comamos chorizos*» ni el «*enriquecernos*». La dinámica

política de las reformas económicas de Cuba es muy diferente de la empleada actualmente en China y Vietnam. En estos dos países, la descentralización económica ha provocado que los intereses regionales y locales confluyan de manera tal que impiden el funcionamiento del partido comunista según los antiguos principios ortodoxos. Las reformas traen consigo no sólo un nuevo discurso, sino también una nueva práctica política, pues el sistema va dando cabida a nuevos actores, tanto políticos como económicos, al tiempo que obliga al partido comunista a asumir nuevas formas de conducta. No parece que lo que se vislumbra en el horizonte político de China y Vietnam sea la democracia, pero tampoco se ha mantenido el statu quo de la acomodada rutina que caracterizaba al sistema político antes del proceso de reformas. La resistencia del gobierno cubano a asumir un amplio programa de reformas se explica por su aversión a cualquier cambio en el carácter ortodoxo de la política cubana, aun cuando éstos se enmarquen dentro de los parámetros que impone un sistema de partido único, que ostenta el monopolio del poder.

El quinto congreso del partido, celebrado en octubre de 1997, confirmó estas tendencias, deparando, en consecuencia, muy pocas sorpresas. Los documentos y las resoluciones transmitían tanto la retórica nacionalista y anti-mercado asumida plenamente en 1995, como un discurso de nuevo cuño que se jactaba de haber logrado superar las crisis de principios de los noventa. Sin embargo, la composición del nuevo Comité Central permite hacer un análisis simbólico sobre la dirigencia máxima del partido. En 1991, el cc se había ampliado a 225 miembros; en 1997, se redujo a 150. A pesar de que la explicación oficial subrayaba las ventajas de unas reuniones del cc menos caras y engorrosas, el estudio de esta reducción nos condujo a conclusiones interesantes. Aproximadamente la mitad de los excluidos provenían del grupo de ciudadanos corrientes admitidos en 1991 como parte de un importante proceso de innovación. Con la reducción de 1997, el partido renunciaba al principio simbólico de incluir representantes *del pueblo* en los niveles más altos de gobierno. El total de ciudadanos corrientes disminuyó de un poco más del 35% a menos del 13%, mientras que el conjunto de cuadros del partido creció desde menos del 29% hasta cerca del 39%, pasando a formar el grupo con mayor representación dentro del cc, además de ser 30 de los 50 nuevos miembros del mismo. Mucho más de la mitad de los viejos cuadros del partido fueron separados del cc, lo que contrastaba con el hecho de que casi todo los militares que habían sido miembros en 1991 fueran incluídos nuevamente en 1997. El ejército mantuvo así una presencia estable en los puestos más altos del gobierno e incluso aumentó su participación dentro del cc por primera vez desde 1965. La continuidad y el incremento de los cuadros militares aumenta la influencia del ejército dentro de las filas del partido, en relación con las nuevas promociones y con los miembros de los sectores en declive tales como las organizaciones de masas. Dentro del sector de administradores estatales se revirtió la tendencia al descenso de forma significativa, pasando de cerca del 14% en 1991 a casi un 25%, lo que implicaba la aceptación a regañadientes de la necesidad de contar con los tecnócratas para llevar a cabo

incluso pequeñas reformas. De esta forma, la composición del CC revelaba la importancia que la cúpula del gobierno confería a los cuadros del partido, a las fuerzas armadas, y a los administradores estatales. Se descartó el proceso innovador de 1991, que plasmaba la antigua preocupación oficial por darle participación al cubano común en los asuntos públicos (como contraposición a su negativa a permitirle una participación autónoma), privilegiando un modelo de dirigencia típica de los viejos partidos comunistas de la URSS y de Europa del Este.

La dirigencia cubana renovó el partido comunista manteniéndose dentro de unos férreos parámetros. El cómo le iría a este partido en un sistema político competitivo y abierto era un asunto que, al parecer, no les preocupaba. No obstante, su interés renovado por el *perfeccionamiento* del PCC ha producido un impacto nada despreciable. El hecho de que la élite cubana lograra hacerle frente a unos obstáculos que parecían insuperables puso de relieve su temple y reforzó su seguridad en sí misma. No obstante, los dirigentes cubanos sabían también que Fidel Castro era mortal y que, sin él, podían perder la partida. La resistencia a las reformas políticas no era la mejor manera de prepararse para enfrentar ese día inevitable.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE CUBA, 1991 Y 1997
(en porcentajes)

	1991 (total de 225)	1997 (total de 150)
PCC	28,9	38,6
Estado	14,2	24,7
Militares	13,8	18,0
Organizaciones de masas	5,8	4,7
Otros	35,1	12,7
Comisión de Apoyo al Cmdte. en Jefe	2,2	1,3
Provincias	34,2	33,3

LA REFORMA DE LAS ASAMBLEAS DEL PODER POPULAR

Las asambleas del Poder Popular representaron un objetivo importante en el proceso de *perfeccionamiento* del sistema político. Estos organismos habían adoptado el antiguo sistema soviético de celebrar elecciones directas sólo a nivel municipal. En 1991, el congreso del partido decretó la celebración de elecciones directas para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional y de las Provinciales, cambio que evidentemente constituía un esfuerzo para lograr una apariencia más democrática. Los procedimientos que seguirían estas elecciones se regularon en una modificación hecha a la ley electoral en 1992. Desde entonces, en Cuba se han celebrado elecciones a todos los niveles en

1992-1993, a nivel municipal en 1995, y a todos los niveles nuevamente en 1997-1998. Pero al igual que en el pasado, sólo los candidatos oficiales pudieron aspirar a un puesto en las asambleas. En las elecciones de 1992, 1995 y 1997, los delegados de las asambleas municipales fueron seleccionados para un período de dos años en contiendas en las que se nominaba, al menos, dos candidatos, lo que constituía la práctica usual desde que se creara el Poder Popular en 1976. En 1993 y 1998, los diputados de la Asamblea Nacional y los delegados de las Asambleas Provinciales fueron elegidos para un período de cinco años. En estos casos sólo se permitió un candidato por escaño, y los nominados necesitaban más de un 50% de votos válidos para ser elegidos. Únicamente el primer período de elecciones de 1992-1993 resultó significativo desde el punto de vista político. Al convocarlas, el gobierno tuvo la oportunidad de mostrar su voluntad de llegar a un consenso político. Por el contrario, en estas elecciones se reforzó el paradigma de la movilización de masas, lo que socavó las perspectivas de una reforma gradual dentro del sistema político existente. En las elecciones subsiguientes de 1995 y 1997-1998, el gobierno se limitó a repetir la experiencia de 1992-1993, confirmando así su escasa disposición para llevar a cabo una apertura política.

En octubre de 1992, se convocó a la Asamblea Nacional para realizar las modificaciones de la ley electoral. Una vez que el partido aceptó realizar elecciones directas, el problema fundamental era si se permitiría o no la participación de candidatos y organizaciones independientes. La aprobación de cierta competitividad en los procesos electorales y, en consecuencia, la posibilidad de alguna diversidad política dentro del parlamento cubano, podría muy bien haber iniciado una dinámica de transición dentro del sistema político existente. En marzo de 1992, el entonces secretario ideológico del PCC Carlos Aldana sugirió que los disidentes y aquéllos que se oponían al socialismo podrían ser nominados, aunque como individuos y no como representantes de grupos o partidos, y sólo si acataban la legalidad socialista. Señalaba también que la Asamblea Nacional podría asumir un pluralismo *«de ideas, opiniones y puntos de vista»*. Pero esta opinión resultó tan fugaz como la permanencia del propio Aldana, quien fue súbitamente depuesto de su cargo en septiembre. Poco después, Juan Escalona, entonces presidente de la Asamblea Nacional, descartó de hecho la posibilidad de que en los procesos electorales se incluyera a nadie que no perteneciera a los círculos oficiales: *«Conociendo las idiosincrasias de nuestro país, no creo que ninguno de estos ciudadanos pueda ser nominado. La comisión de nominaciones tendría que evaluar su nominación y la asamblea municipal es responsable ante el país de nominar a los candidatos apropiados»*.

De manera que cuando se celebró el período de sesiones de la Asamblea Nacional, la dirigencia cubana ya se había pronunciado en contra de la diversidad política y la ley electoral hacía casi imposible que se nominara, y mucho menos que se eligiera a disidentes o a ciudadanos que no simpatizaran con el gobierno. El hecho de que no se procediera a la separación de funciones (y mucho menos de poderes) en un sistema político monopartidista desacreditaba las aseveraciones de que el PCC no se inmiscuía en los procesos de nominación

y elección de los candidatos. De hecho, las comisiones electorales estaban subordinadas al PCC. Castro resumió sucintamente el espíritu de la nueva ley electoral aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional con las siguientes palabras:

Un principio fundamental es no caer jamás en el error de aceptar el pluripartidismo porque eso significa fragmentar en mil pedazos una sociedad que sólo puede resistir con el grado de unión con que cuenta. La mayoría es nuestra y tenemos la obligación sagrada de mantenerla, por difíciles que sean las condiciones. Tenemos que movilizar al pueblo, acudir a sus resortes, sus mejores valores, su dignidad, patriotismo, conciencia, valentía y heroísmo.

La dirigencia cubana rechazó de manera tajante convertir a la Asamblea Nacional en algo semejante a un cuerpo legislativo que sostuviera sesiones regulares y prestara consideración a puntos de vista opuestos. En diciembre de 1993, Castro manifestó claramente su frustración ante una sesión de la Asamblea que resultaba particularmente animada: *«Cada vez que aquí se dice algo tenemos que esperar que hablen cincuenta y cinco, para por lo menos aclarar algunas ideas. Yo me pregunto si habrá que esperar que hable el número cincuenta y seis para aclarar que ése no es el propósito de esta reunión»*. En contraste con lo anterior, la dirigencia vietnamita aprobó recientemente la posibilidad de que se postularan candidatos independientes para la Asamblea Nacional, tres de los cuales derrotaron a los propuestos por el gobierno por un amplio margen y actualmente fungen como diputados a nivel nacional. Uno de ellos, médico famoso, es veterano del ejército survietnamita. Hasta ahora, el gobierno cubano ha sido incapaz de hacer un gesto simbólico de apertura política similar.

En el proceso electoral de 1992-1993, primera ocasión en que se celebraron elecciones para dos niveles, uno en diciembre y otro en enero, los resultados fueron muy diferentes entre sí. En diciembre, como había sido y continuaría siendo usual, el electorado salió a votar *en masa*. Los funcionarios gubernamentales afirmaron que cerca del 100% de los votantes había participado en estos comicios, lo que daba la medida del apoyo popular, haciendo caso omiso de su advertencia sobre *«el globo inflado de la participación masiva»* que había surgido en un simposio sobre el Poder Popular, celebrado en 1991. Varias fuentes calcularon un tercio de votos anulados (en blanco o invalidados), lo que en un sistema político de elecciones no competitivas equivale a una votación contra el gobierno. Al principio, éste ignoró dichos cálculos y no ofreció tampoco sus propias cifras. Dos meses más tarde, admitió que menos del 15% de los votos habían sido anulados. Al final, la cifra oficial fue del 10%. Sin lugar a dudas, la reacción oficial, tan retrasada y corregida, prestó credibilidad a las cifras extraoficiales.

Evidentemente, la dirigencia cubana se sorprendió: hasta un tercio del electorado le había enviado un mensaje enérgico e inesperado. No podían permitir que sucediera lo mismo en febrero; y por supuesto, no sucedió. El partido se preparó para la segunda ronda de elecciones como no lo había

hecho para la primera: de hecho, tal y como ocurrió con los dos meses de silencio oficial en relación con la cifra de votos invalidados, la intensidad de la «campana» de febrero también respaldaba los cálculos extraoficiales de los resultados de la ronda de diciembre. El objetivo primordial del gobierno era demostrar que su mandato era, sin duda alguna, popular, o cuando menos dar esa imagen. En primer lugar, Castro hizo un llamado patriótico a votar por la totalidad de los candidatos: *la patria* necesitaba una demostración de unidad en lugar de un voto selectivo. Sin embargo, en octubre de 1992, el propio Castro había argumentado: «*La decisión debe dejarse a la conciencia de la gente. Si ponemos el énfasis en que se vote por todo el mundo, entonces puede favorecer el criterio de una cosa cerrada. Lo que la abre, precisamente, es la opción de votar por el que uno quiera o por ninguno*». Convenientemente, la aprobación en los Estados Unidos del Cuban Democracy Act (Torricelli) de 1992 le dio argumentos para enarbolar una vez más la bandera del patriotismo. En segundo lugar, el gobierno ejerció medidas de presión e intimidación para atraer nuevamente a esa tercera parte descarriada y para disuadir al resto de invalidar sus boletas o votar de modo selectivo. Actualizó los registros de votantes, aumentó el número de colegios electorales y envió a los dirigentes de los CDR a todas las casas para instruir a la ciudadanía en los supuestamente complejos procedimientos de la votación.

El 24 de febrero, más del 99% de los votantes fueron a las urnas. El 88,5% votó por todos los nominados y el 7,2% invalidó sus boletas; en La Habana, el total de los votos anulados sumó un 14,3%. Ningún diputado recibió menos del 87% de las votaciones. Fuentes no oficiales situaron la proporción de boletas anuladas en La Habana entre un 10 y un 20%, y el porcentaje de habaneros que votaron de manera selectiva en un 30%. Según las cifras oficiales, cerca del 18% de los votantes no siguieron las recomendaciones del gobierno: votar por todos los candidatos. Castro denominó a este resultado «una victoria olímpica».

¿Qué demostró el proceso electoral de 1992-1993? En primer lugar, durante el mes de febrero el gobierno cubano ejerció cierta presión con el fin de movilizar a la población, y ésta, ya fuera por convicción, temor o impotencia accedió a las demandas oficiales de mostrar unidad. Las elecciones también pusieron de relieve una debilidad evidente: los resultados fueron obtenidos gracias a la política de movilizaciones, lo que difícilmente se traduce en una gobernabilidad efectiva y de largo plazo. En segundo lugar, los resultados de los comicios de diciembre fueron especialmente reveladores: cuando el gobierno no montó una campaña continua, cerca de un tercio del electorado emitió un voto de protesta. ¿No sería razonable esperar que muchos más ciudadanos expresarían su oposición en unas elecciones libres o un plebiscito? En tercer lugar, la decepción que manifestara el gobierno por la proporción de boletas anuladas durante los comicios de diciembre, y la «campana» que realizara para las elecciones de febrero, confirmó su incapacidad para aceptar algo menos que la casi unanimidad en una votación a favor de su mandato, y demostró su obstinada dependencia de la política de movilización de masas. Quedó claro que el sistema político no cuenta con los medios necesarios para

evaluar y acatar la voluntad popular. Cuando el electorado envió un mensaje enérgico en los comicios de diciembre, el gobierno recurrió a la fórmula segura de la movilización de masas, que logró impedir que los ciudadanos emitieran un voto negativo, pero que no dio al voto positivo un verdadero significado. Si a finales de los sesenta el pueblo cubano había manifestado una *resignación de apoyo*, según palabras del difunto Carlos Rafael Rodríguez, ahora expresaba una *resignación de votar por todos*. La «victoria olímpica» poseía también un aura pírrica.

¿UNA TRANSICIÓN CUBANA?

A principios de los noventa el proceso de *perfeccionamiento* disipó rápidamente los tenues indicios de reforma que hubieran podido fomentar una transición del sistema político desde dentro. Si se hubiera permitido que un número simbólico de individuos de la oposición se postulara y ganara en las elecciones, la Asamblea Nacional hubiera podido adquirir una apariencia de cuerpo legislativo y emprender una dinámica política nueva. Pero el gobierno cubano se vió simplemente imposibilitado para seguir el ejemplo de Vietnam, que había dado algunos pasos aperturistas en su propia asamblea. Con Castro todavía al mando, el PCC parece no tener los medios necesarios para distanciarse de los viejos dogmas que rigen la política cubana: el incuestionable liderazgo de Castro, el monopolio del partido único y las movilizaciones de masas. Esta fórmula, aun cuando ha dado buenos resultados para alcanzar el objetivo inmediato de permanecer en el poder, no se presta para sentar las bases de la gobernabilidad a largo plazo ni brinda tampoco la flexibilidad que el PCC requerirá para mantener el control del poder o ser una fuerza política viable sin Fidel Castro. No es probable que los viejos métodos de gobierno obtengan la aprobación de los gobernados en una Cuba nueva.

Sin embargo, la visita del Papa Juan Pablo II a la isla, en enero de 1998, abrió un posible escenario alternativo de transformación. A mediados de la década de los ochenta la iglesia católica volvió a afianzarse de forma gradual en la sociedad cubana: las comunidades parroquiales, numerosas publicaciones, algunas instituciones cívicas y una incipiente red de servicios sociales establecía cada vez más relaciones dentro de la comunidad católica (actualmente más representativa de todas las razas y sectores de la sociedad de lo que era antes de 1959) y entre los católicos y el resto de los ciudadanos. Como parte de los preparativos para la visita papal, los representantes de la iglesia visitaron casi todos los hogares cubanos y celebraron misas al aire libre a lo largo de toda la isla. Durante cinco días de enero, cientos de miles de ciudadanos se congregaron para participar en las celebraciones religiosas, y millones escucharon o vieron por la radio y la televisión las misas transmitidas en directo. En sus homilías, Juan Pablo una y otra vez les hacía llegar un mensaje de inclusión, reconciliación y respeto por la dignidad individual. «*No tengan miedo*», afirmaba con frecuencia. «*Ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia historia personal y nacional*». Las multitudes respondían con entusiasmo entonando una y otra vez un canto que reflejaba de manera conmovedora el sentimiento popular:

«Cuba, con el papa, renueva su esperanza». Los santiagueros le hacían el mayor de los cumplidos: «Juan Pablo, hermano, ya tú eres cubano». Gritos de «¡Libertad! ¡Libertad!» electrizaron a cientos de miles en las misas papales en La Habana y en Santiago. El papa, como un abuelo muy querido, se ganó los corazones de millones de cubanos. La visita de Juan Pablo II, cualquiera que sea su futuro impacto, señaló de manera inequívoca un momento histórico: durante un breve espacio de tiempo, el gobierno cubano fue relegado a un segundo plano.

Después de la visita papal, una nueva etapa aguarda a la Iglesia Católica cubana. Sin duda alguna, hijos pródigos del catolicismo y nuevos conversos harán crecer el redil de los fieles. Pero la misión pastoral de la iglesia asume ahora preocupaciones que sobrepasan el ámbito eclesiástico: esta misión lleva consigo la ineludible responsabilidad cívica de fomentar una sociedad más abierta. ¿De qué otra forma podrían los sacerdotes predicar el evangelio y los católicos dar testimonio de su fe? Una iglesia católica renovada propondría un desafío sin precedentes al gobierno de Cuba: mantener un diálogo con una institución que tiene su propia agenda, aun cuando su contenido sea esencialmente religioso. En una sociedad tan estrictamente regulada como la cubana las concesiones a lo sagrado, como la visita del Papa Juan Pablo II, ya han tenido profundas repercusiones en el mundo de lo profano. La cuestión es si el Partido Comunista de Cuba posee la capacidad política para mantener un nuevo nivel de relaciones iglesia-estado, a través de las cuales la talla y alcance de una institución independiente dentro de la sociedad cubana crecería de forma inevitable. El gobierno cubano se ha resistido enérgicamente al surgimiento de la diversidad política y a la puesta en práctica de reformas económicas de largo alcance; es posible, tal vez, que resulte menos rígido con una institución religiosa que no posee una agenda política explícita. En tal caso, los efectos del diálogo entre iglesia y estado podrían repercutir gradualmente en todos los rincones de la sociedad cubana.